

México

Cambios de forma

Raúl Trejo Delarbre

Competitividad y diversidad definen hoy el panorama político mexicano. A las elecciones presidenciales de julio del 2000 se presentan once partidos, aunque la contienda central será entre PRI, PAN y PRD. El PRI convocó, por primera vez, a seleccionar a su candidato en comicios abiertos que señalan la mutación del otrora omnipresente presidencialismo mexicano. Las oposiciones fracasaron en el intento para presentarse en una alianza de la que, en el fondo, sus principales dirigentes no estaban convencidos.

El tránsito de la premodernidad política a la democracia integral sigue siendo lento y abrupto pero —eso sí— muy entretenido para los mexicanos. Indudablemente, ya existe competencia política, incluso al interior del partido que ha gobernado México durante siete décadas, pero pocas veces sustentada en debate de ideas. En la oposición, tenemos dos organizaciones sólidas y una oncenena de partidos menores. Pero al menos nueve meses antes de las elecciones, no parece existir una alternativa delante del proyecto económico y político que han impulsado los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los medios de comunicación, ahora de manera muy clara, se han convertido en la arena de las disputas públicas más relevantes y le imponen ritmos, formatos e incluso agendas a la política mexicana.

Elecciones confiables, aunque costosas

El 2 de julio del 2000 habrá comicios presidenciales y parlamentarios. Las elecciones se han convertido en la vía por excelencia para que los mexicanos definan el rumbo del país. Desde las discutidas votaciones de 1988, que ganara Carlos Salinas de Gortari, la legislación electoral ha cambiado de manera muy significativa. Hoy, los comicios federales son organizados y supervisados por una institución autónoma, cuya independencia del Gobierno se

RAÚL TREJO DELARBRE: doctor en Sociología por la UNAM; autor de una decena de libros sobre medios de comunicación, sindicalismo y el sistema político mexicano; investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de esa universidad; columnista político en el diario *La Crónica de Hoy* y director del semanario *etcétera*, Ciudad de México.

Palabras clave: sistema político, partidos, elecciones, México.

ha demostrado en numerosas ocasiones. El Instituto Federal Electoral (IFE) es regido por ocho consejeros ciudadanos, que fueron designados hace tres años, y que pasaron con éxito su primera prueba en las elecciones intermedias de julio de 1997. Para su nombramiento, a cargo de la Cámara de Diputados, los consejeros no debían tener filiación partidaria, aunque varios de ellos eran simpatizantes de algún partido, especialmente de la oposición. Algunos han llegado a manifestar sus posiciones en contra del PRI, que los ha denunciado por falta de objetividad en su comportamiento. Más allá de los excesos de tales funcionarios, no deja de ser significativo que el partido más incómodo con ellos sea precisamente, el que ha gobernado al país durante tanto tiempo. Aunque ha sido cuestionado el desempeño de algunos de esos consejeros, la autonomía del Instituto es evidente. En México el IFE es, quizá, la institución de más confiabilidad para los ciudadanos.

Este es el organismo que organizará las elecciones de julio próximo. La acentuada desconfianza que en otros tiempos los mexicanos han tenido de las elecciones –debido a la sospecha, muchas veces fundada, hacia las proverbiales trampas del PRI– ha obligado a que México sea el país en donde existen los mayores candados para tratar de garantizar que los votos cuenten, y se cuenten: los ciudadanos deben registrarse en un padrón de electores y poseer una credencial a prueba de falsificaciones; la lista de votaciones disponible el día de los comicios incluye el nombre y el domicilio, así como también la fotografía digitalizada de cada ciudadano; tras su voto, al elector se le identifica con una tinta indeleble para que no pueda sufragar más de una vez; los partidos tienen derecho a designar representantes en cada casilla electoral. Todo eso puede parecer normal y de hecho en México comienza a serlo, pero la complejidad de ese entramado se aprecia mejor si atendemos a las dimensiones de los comicios. Es posible que el padrón electoral para el 2000 sea mayor a los 50 millones de ciudadanos. Se requerirá instalar tal vez más de 100.000 casillas de votación en todo el país, y cada una de ellas estará encabezada por ciudadanos designados por sorteo que, antes del día de las elecciones, habrán recibido un curso de capacitación. En 1997, las elecciones federales costaron más de 253 millones de dólares a precios actuales. Esa cantidad será mayor en el 2000. Se trata de sumas muy grandes, para un país que tiene enormes zonas de pobreza extrema. Sin embargo, la democracia es cara y sin tantas garantías sería difícil que los ciudadanos confiaran en las elecciones.

Fox y Cárdenas

La competencia por el Poder Ejecutivo tendrá como protagonistas principales a los tres partidos de dimensiones nacionales. Acción Nacional (PAN), de centro-derecha, ha postulado a Vicente Fox Quesada, pintoresco empresario que llegó a ser gobernador de Guanajuato, con un discurso heterodoxo que reniega de los políticos tradicionales. Los postulados de Fox no han sido tan extremos (al menos todavía) como los de caudillos autoritarios, al estilo Fujimori y Chávez. Pero se inscribe en esa corriente ya universal que, con la excusa de estar en contra de la política, busca y logra posiciones de gobierno.

Vicente Fox fue funcionario de alto nivel de la Coca Cola en México y, ya maduro, decidió incursionar en la política. Casi nunca usa traje y corbata: prefiere hacer campaña en jeans y con botas vaqueras. Lleva en el cinto una enorme hebilla de plata con su apellido. No es un hombre de ideas, aunque se presenta como personaje de ideales. Hace poco dijo que cuando llegue a la presidencia el PIB de la economía mexicana crecerá 7%, pero cuando se le ha preguntado cómo lo conseguiría fue incapaz de ofrecer algo más que frases hechas y respuestas huecas. A pesar de esa debilidad programática –o quizá gracias a ella– Fox se ha convertido en un personaje de singular presencia pública. De hecho ha logrado mayor popularidad que el PAN, con lo cual se ratifica la tendencia, casi universal, a que los candidatos alcancen más renombre que los partidos. En el otro flanco se encuentra Cuauhtémoc Cárdenas, que también tiene más adhesiones que su agrupación, la Revolución Democrática (PRD). A pesar del perfil de centro-izquierda que en apariencia define ideológicamente al PRD y que podría propiciar un proyecto de gobierno con matices originales, la campaña de Cárdenas sigue hipotecada a un antioficialismo contestatario pero de escasas propuestas. Esa actitud le fue redituable cuando era candidato por primera vez en 1988, aunque no tanto en la segunda ocasión, seis años más tarde, cuando la crisis política de 1994 solidificó la adhesión social en torno del PRI. Ahora que por tercera vez busca ser presidente, Cárdenas tiene una desventaja adicional: desde diciembre de 1997 y hasta fines de septiembre de 1999 fue alcalde de la ciudad de México, sin tener un desempeño especialmente exitoso. Ganó esa posición de manera contundente, gracias a la enorme expectativa de cambios que su candidatura suscitó entre los habitantes de la capital, pero ahora la ausencia de logros se ha vuelto un obstáculo en sus aspiraciones. Los mexicanos ya han comprobado que, ubicado en responsabilidades de Gobierno, Cárdenas puede ser tan gris y tan poco eficiente como muchos otros funcionarios del PRI, al que perteneció la mayor parte de su vida.

Coalición opositora: sueño y artificio

Tanto el PAN como el PRD experimentan, al menos durante el resto de 1999, las secuelas de una fallida coalición en la que tenían quizá exageradas esperanzas. Hacia mayo, en los dos partidos se extendió la iniciativa para presentarse juntos en los comicios presidenciales. Tanto Fox como Cárdenas dijeron que aceptarían el resultado de una consulta para escoger el candidato de una alianza opositora. Sin embargo, las diferencias entre los personajes y entre los partidos son tan profundas que nunca lograron ponerse de acuerdo para tomar una decisión. Apenas en marzo pasado, el PRD realizó una elección interna para renovar presidencia y comité nacional, en la que se produjeron tantas irregularidades que los resultados tuvieron que ser cancelados. Había 10 planillas que competían por la dirección, pero dos con mayoría de votos. Ambas se culparon mutuamente de fraude y todo indica que, en efecto, en varios estados simpatizantes de esas dos planillas se robaron urnas, alteraron actas y practicaron diversos tipos de irregularidades. Anuladas las elecciones, tuvieron que repetirse y los integrantes de las principales plani-

llas conformaron una fórmula encabezada por Amalia García –que en su juventud tuvo militancia comunista–, que ganó sin contratiempos.

La experiencia de las elecciones malogradas dentro del PRD puso en alerta al PAN, cuyos dirigentes no confiaban en el partido de Cárdenas para organizar votaciones conjuntas de las que surgiera el candidato presidencial de la oposición. Los panistas propusieron que en vez de comicios abiertos, la decisión se tomara a partir de una encuesta nacional. Esa pretensión era natural, porque desde comienzos del año Fox ha estado adelante en diversas encuestas. En cambio, el PRD y Cárdenas confiaban en su capacidad de movilización para llevar a las urnas –incluso con procedimientos clientelares del corte más tradicional– a sus simpatizantes. El PAN es fundamentalmente un partido de ciudadanos con gran experiencia en la lucha electoral, pero que no suelen movilizarse en otras ocasiones. En cambio las bases sociales del PRD, aunque menos numerosas, suelen ser más activas y estar en constante situación de alerta. Esas diferencias se pusieron de manifiesto en la discusión sobre la alianza que ambos partidos decían promover. Pero sobre todo, en esas deliberaciones pesaron la reticencia de Fox y Cárdenas para renunciar a sus respectivas candidaturas.

Con el fin de buscar un arreglo, los partidos designaron una comisión formada por 14 personalidades del periodismo, la academia y otras actividades, quienes en su mayor parte, aunque sin militancia partidaria explícita, tenían simpatías hacia el PRD. Así que no resultó sorprendente que su propuesta de elección fuese casi la misma que había impulsado el partido cardenista. Los dirigentes del PAN se sintieron engañados y en los últimos días de septiembre rompieron con el proyecto de alianza.

Once partidos políticos nacionales

Junto con esos dos grandes partidos, a la iniciativa por la alianza se habían sumado casi todos los demás de la oposición. Dos de ellos, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo (PT), tienen presencia parlamentaria desde hace varios años. Otros seis, recibieron su registro apenas en julio pasado.

En México, el financiamiento de los partidos proviene fundamentalmente de fondos públicos. Para tener derecho a esos recursos así como a otras prerrogativas (entre ellas, acceso a espacios gratuitos en la radio y la televisión) y para competir en los comicios, los partidos deben ser registrados por la autoridad electoral una vez que demuestren una cantidad mínima de afiliados (en este caso, la base para lograr el registro fue de aproximadamente 70.000 miembros). Entre los seis nuevos partidos, hay dos que provienen de pequeñas corrientes que ya habían tenido presencia política: el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), que en los años 50 hizo oposición fiel y disciplinada al PRI, y el Partido Alianza Social (PAS), integrado por derechistas católicos. Otros dos más surgieron de escisiones recientes del PRI. Uno es el Partido Centro Democrático (PCD), encabezado por Manuel Ca-

macho Solís, quien fuera uno de los funcionarios más cercanos al presidente Salinas y que se distanció del Gobierno cuando no se cumplieron sus ambiciones de obtener la candidatura presidencial priísta en 1994. El otro, Partido Convergencia Democrática, fue fundado por Dante Delgado, ex-gobernador priísta de Veracruz. Uno más, el Partido Sociedad Nacionalista (PSN), resulta de una escisión del PARM y no puede decirse que tenga ideología ni posición política muy claras.

Todos esos partidos (PVEM, PT, PARM, PAS, PCD, Convergencia y PSN) formaban filas junto con PAN y PRD en el proyecto de la alianza opositora. Sin embargo, nunca fueron más allá de la discusión sobre los procedimientos para designar candidato. A pesar del pragmatismo que, en México como en todo el mundo, tiende a difuminar las coordenadas ideológicas de la política, era muy difícil que partidos de perfiles tan heterogéneos coincidieran alrededor de un proyecto común. Antiguos socialistas y recalcitrantes conservadores hubieran tenido que participar tras las mismas banderas al lado de recientes ex-priístas y opositores de toda la vida. No hubo alianza en primer lugar porque cada uno de los dos partidos centrales de la oposición estaba convencido de que la coalición tenía que ser en torno suyo. Pero además, la alianza se habría roto al momento de precisar qué tipo de país pretendían modelar sus integrantes. Solamente uno de los diez partidos se mantuvo al margen de las negociaciones. El Partido Democracia Social, con registro apenas desde julio, consideró que no era aceptable la fusión de propuestas y trayectorias tan encontradas como las del PAN y el PRD. En vez de ello este partido, con una membresía modesta, quiere conformar un perfil propio, de izquierda moderna, abierta y tolerante y con una propuesta social democrática. El PDS es encabezado por Gilberto Rincón Gallardo, dirigente de singular respetabilidad (atributo peculiar en un contexto donde los líderes políticos suelen descalificarse unos a otros) que pasó por las izquierdas comunista y socialista.

Presidencialismo agotado y renovado

El propósito central que animaba las expectativas en torno de la alianza opositora era derrotar al PRI. Creado en marzo de 1929, ese partido ha conservado el poder casi siempre por las buenas, pero cuando lo ha creído necesario también por las malas. Después de ser considerado durante varias décadas como la clave de la relativa pero eficaz estabilidad política, el PRI ha sido visto como el principal dique para una plena democracia. En realidad no ha sido, él solo, ni una ni otra cosa. El sosiego que salvo algunas excepciones se mantuvo en el escenario público al menos desde los años 40 y hasta ya entrados los 70, se explica por el desarrollo económico que México mantuvo en ese lapso y también debido a la escasa maduración cívica de la sociedad. El PRI era protagonista, pero también escenario, de las principales tensiones políticas que, en ausencia de un auténtico sistema de partidos, se libraban en su interior tanto como fuera de él. Más que un partido sólido, cohesionado y homogéneo, el PRI ha sido una informal pero casi siempre disciplinada

coalición de fuerzas y corrientes nacionales y regionales, unificadas alrededor de la autoridad presidencial.

El presidencialismo ha sido, incluso en virtud de sus fuertes atribuciones constitucionales, el eje del sistema político. Una presidencia sólida fue parte de esa estabilidad de la que se benefició un país en crecimiento económico –y demográfico– durante buena parte del siglo. Pero ese pilar básico del sistema mexicano también ha sido afectado por las transformaciones sociales y los cambios en la cultura política. Sus méritos han sido a la vez lastres del presidencialismo respecto del resto del sistema mexicano. No ha sido gratuito, ni sorpresivo, que a la institución presidencial se le adjudique también buena parte de responsabilidad por el estancamiento político del país. Disminuida su autoridad otrora casi omnipotente, el presidencialismo mexicano ha tenido que cambiar, reconociendo la existencia de nuevos actores políticos y sociales, que constituyen contrapesos, y admitiendo mudanzas en algunas de las costumbres políticas más legendarias –pero también más autoritarias que ha tenido el país. La más notable de ellas era la facultad no escrita, mas invariablemente practicada, que tenía el presidente de la República para designar al candidato presidencial del PRI –es decir, para designar a su sucesor pues hasta ahora, parecía indudable que el aspirante de ese partido ganaría las elecciones.

Novedosas primarias en el PRI

Ahora ni el presidente designa al candidato del PRI, ni el partido tiene la certeza de que vencerá en las elecciones. Estas dos grandes transformaciones de la política mexicana se producen en un panorama de tensiones, intensa competencia y contradicciones que se expresan, entre otros ámbitos, en el seno del partido. Por primera vez en su septuagenaria historia, el PRI ha organizado elecciones primarias para elegir su candidato. Ya antes empleó ese procedimiento para las elecciones locales de 1999.

Convocadas para el 7 de noviembre, las elecciones internas son peculiares entre otras cosas porque podrán votar todos los ciudadanos, sean o no miembros del PRI. Con esa medida se buscó enfatizar la apertura de los procesos internos de este partido, aunque también se debió a la inexistencia de un padrón de militantes –la membresía, como tantas otras cosas en el PRI, ha sido tan irregular que sus afiliados no suelen cubrir cuotas y nadie tiene una idea precisa de cuántos mexicanos son declaradamente priístas. Para estas elecciones internas se inscribieron cuatro candidatos. Francisco Labastida Ochoa, ex-secretario de gobernación (ministerio del Interior), había sido gobernador de Sinaloa y desde su postulación fue reconocido como el precandidato del presidente Zedillo. A su equipo de campaña se sumaron docenas de funcionarios de alto rango que renunciaron a sus cargos gubernamentales para acompañarlo en la búsqueda del voto de los simpatizantes priístas (en México está prohibido que un funcionario público sea candidato a un cargo de elección, o que haga política partidaria más allá de sus días de asueto).

Labastida no ha sido brillante ni audaz en las tareas públicas desempeñadas hasta ahora. Como precandidato de su partido, buscó establecer tantos equilibrios entre las contradictorias fuerzas internas del PRI que, por ello, su propuesta política careció de originalidad. Eso sí, durante la campaña interna insistió en desplazar los ataques personales con un debate de ideas, aunque sin iniciativas destacadas e interlocutores suficientes.

La gran sorpresa en la competencia fue la beligerancia de Roberto Madrazo Pintado, ex-gobernador de Tabasco, que se erigió en el principal –y muy competitivo– adversario de Labastida. Madrazo no ha sido un hombre ajeno al sistema, pero en la campaña interna del PRI se comportó como si lo fuera. Lejos de disciplinarse delante de la candidatura considerada como oficial, sostuvo la suya con pertinaz agresividad, especialmente en anuncios de televisión que presentaban a Labastida como un tipo conservador y débil mientras que a Madrazo lo mostraban agresivo y capaz de tomar decisiones. Su lema de campaña, «¿Quién dice que no se puede?», sintetizaba el mensaje con el que buscó adherentes: sí es factible, desde el PRI, ganarle al Gobierno. La contradicción implícita, fue la debilidad principal de Madrazo. Muchos ciudadanos no olvidaban que antes de la rudeza que demostraba delante de Labastida, como gobernador había sido también un hombre del sistema –tan disciplinado, obsequioso y apegado a las viejas reglas como los más ortodoxos priístas. Además, Madrazo ha representado a grupos del PRI conocidos por su vocación autoritaria y que discrepan de los gobiernos más recientes porque emprendieron reformas que, a su juicio, fueron exageradas a favor de los partidos de la oposición. Junto a Labastida y Madrazo se inscribieron el ex-gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, y el ex-dirigente nacional priísta Humberto Roque Villanueva. El primero, un político de larga trayectoria y singular inteligencia, hubiese tenido mejor suerte si la contienda entre los dos precandidatos principales no hubiera concitado toda la atención. Por su parte Roque, un hombre que al comienzo de la actual administración era muy cercano al presidente («mi brother», lo llamaba Zedillo) se alejó del grupo central en el poder cuando su imagen pública se vio afectada por el apoyo brindado a los aumentos fiscales propuestos por el Gobierno.

La calificación de Zedillo

En las elecciones de julio del 2000 habrá una fuerte competencia entre los tres principales partidos: PRI, PAN y PRD, cuyas oportunidades están en ese orden. Algunos de los partidos pequeños presentarán sus propios nombres y otros resolverán adherirse a una de las postulaciones centrales. Las clientelas sólidas de los partidos se mantendrán, pero hay una significativa franja de ciudadanos que no tiene una opinión definida sobre el sentido de su voto y de quienes influirán las campañas en los medios que, seguramente, serán de una agresividad y una cobertura inusitadas en México. Habrá debates y exposición de proyectos pero, previsiblemente, ajustados a las exigencias de la televisión, que suele demandar pocas palabras en pocos segundos. Por lo pronto ha sido frecuente que los aspirantes de los partidos

comparezcan en los programas cómicos de mayor audiencia. Algunos de esos candidatos se han disfrazado, han memorizado *sketches* y han querido aparecer graciosos, para contemporizar con el público de esas series televisivas.

En septiembre pasado, las encuestas de intención de voto sugerían que los ciudadanos estaban dispuestos a votar en un 35% por el candidato del PRI, en algo más de un 30% por Acción Nacional y un 15% por el PRD. El 20% restante, se divide entre los partidos pequeños y los electores indecisos. Desde luego, el resultado en julio estará muy ligado a la opinión que para entonces, los mexicanos tengan de la situación del país y del Gobierno saliente. Diez meses antes de esos comicios, el balance de la mayoría acerca del Gobierno de Ernesto Zedillo era, fundamentalmente, de aprobación. En un sondeo del diario *Reforma* publicado en septiembre, el 66% de los ciudadanos aprobó la gestión presidencial. Ante la pregunta sobre la calificación merecida en una escala de 1 a 10, el promedio fue de 6,8 —el más alto, desde que Zedillo tomó posesión en diciembre de 1994. Si el PRI logra aprovechar esa imagen favorable, quizá se mantenga en el poder. Tendrá, a contracorriente, las campañas de la oposición que utilizarán con inclemencia las no pocas equivocaciones e insuficiencias oficiales. Sin embargo, ahora tanto el PAN como el PRD han estado a cargo de gestiones locales (sus respectivos candidatos han gobernado Guanajuato y la ciudad de México) y también tienen faltas que demuestran que el cambio de un partido político no resuelve por sí solo las deficiencias o necesidades de la administración pública.

Las campañas dentro del PRI sugirieron que, aunque con enormes dificultades, el partido puede renovarse. Hasta dónde lo consiga, es algo incierto. No basta con cambiar en las formas, aunque como decía Jesús Reyes Heróles, un viejo ideólogo priísta de los años 70, en política la forma es fondo. Allí radica una de las aptitudes, pero también limitación del PRI: a lo largo de su extensa e inquieta historia, ha demostrado que puede cambiar en el terreno de las formas pero no necesariamente en las cuestiones de fondo. Esa dificultad para renovarse la padece el resto de los partidos mexicanos. Ello no es casual, porque todos se han moldeado a contrapelo, o incluso a la sombra de la cultura política priísta. Articular la modernización de la forma con la del fondo implica no solo establecer reglas capaces de garantizar la limpieza electoral y la competencia dentro de cada partido sino, junto con ello, crear un discurso nuevo. Y eso sigue sin aparecer en un panorama político dominado por la vieja retórica y las mismas propuestas, aunque ahora se propaguen a través de la televisión, en horarios estelares y en cadena nacional.

Ciudad de México, octubre de 1999